

Los trabajadores contra el pacto de la Moncloa

Miguel Romero

[No hemos conseguido encontrar la edición en castellano de Inprecor donde figuraba este artículo. En su lugar publicamos la traducción de la edición francesa que reproducimos al final. NdE].

Tras el pacto social llegó rápidamente el pacto político, con sus aspectos poco novedosos: cambios menores de leyes vigentes sobre la libertad de expresión y los derechos de asociación y manifestación; revisión de algunos artículos del código penal (sin tocar los relativos al divorcio); medidas de centralización del aparato represivo que incluyen la creación de una brigada “antiterrorista” denominada “Unidad de Policía Judicial”, etc. Alianza Popular (AP), el partido de extrema derecha de Fraga Iribarne, no ha suscrito el pacto so pretexto de que “no refuerza suficientemente la autoridad del Estado”; los dirigentes de AP han alardeado de haber impedido, gracias a su presencia en las negociaciones, la desmilitarización de la Guardia Civil. En efecto, este cuerpo represivo mundialmente conocido sigue formando parte de las Fuerzas Armadas.

“Aplicar el pacto”

Los trabajadores han podido experimentar muy pronto las consecuencias del pacto. Varios convenios salariales suscritos antes de los acuerdos de la Moncloa han sido denunciados por la patronal por “caducos”, pues los aumentos previstos en ellos superan los límites fijados en el pacto. Los productos sometidos a control de precios han pasado de 147 a 86; se han anunciado inminentes aumentos de precios del orden del 30 % en los transportes públicos, el aceite de oliva, el tabaco, etc. Resulta significativo que al día siguiente de la firma del pacto político se conociera la existencia de una “circular restringida”, emitida por el ministro del Interior y dirigida a los gobernadores civiles. Este documento constituye una verdadera declaración de guerra contra los actos que el ministro incluye en la categoría de “subversión”, a saber, “los actos ilegales de las asociaciones políticas legalizadas”, “las manifestaciones ante edificios públicos”, “los piquetes de huelga”, “las informaciones de prensa que menoscaben a las fuerzas de orden público”, “las destituciones de ayuntamientos” por la población y finalmente “todo lo que cuestione la unidad de España, la persona del Rey y su familia o las fuerzas armadas y de orden público”. Del documento emana un inolvidable relente franquista.

Algunos pensaban que los partidos obreros mayoritarios levantarían la voz contra semejante amenaza o, al menos, matizarían su apoyo al pacto de la Moncloa, pero se vieron rápidamente defraudados. Pocos días después, Carrillo declaró en televisión, entre otras cosas: “Estoy convencido de que los trabajadores apoyarán la aplicación de los pactos, porque la clase obrera es mucho más responsable de lo que muchos creen.” Felipe González, a su vez, dirá: “Se han llevado a cabo importantes avances en la comprensión de las libertades fundamentales [...]. Nosotros, los socialistas, pasaremos a una oposición muy constructiva y seremos muy exigentes para que el gobierno aplique el pacto.”

“Aplicar el pacto”, este es el gran argumento, el “gran objetivo” en que se han puesto de acuerdo las direcciones socialista y eurocomunista, al margen de sus divergencias conocidas que podrían resumirse del modo siguiente: ante el pacto, Comisiones Obreras responde “sí, pero” y la UGT “no, pero”. Carrillo (PCE) y González (PSOE), Redondo (UGT) y Camacho (CCOO) insisten cada vez en la necesidad para los trabajadores de

hacer todo lo posible por lograr que el “gobierno aplique el pacto de la Moncloa”. No tienen otra consigna, otro objetivo que este.

Primeras reacciones

¿Cómo han reaccionado los trabajadores? En general, las primeras reacciones combinan tres elementos contradictorios. En primer lugar, el rechazo del pacto social: los intentos de las direcciones reformistas de embellecer los aspectos económicos del “compromiso histórico” apenas han calado; la clase obrera comprende muy bien que quieren hacerle pagar íntegramente el coste de la crisis y no confía en absoluto en las promesas de “prosperidad futura”.

En segundo lugar, una importante desorientación política, acompañada de dudas sobre la posibilidad práctica de poner en jaque el plan: el comportamiento de las direcciones reformistas (que, por cierto, dedican muchas energías a intercambiar insultos), las dificultades para poner en pie una respuesta unitaria y, en particular, la audiencia que encuentra entre los trabajadores el argumento de la “amenaza de golpe de Estado”, crean ese malestar perceptible en las fábricas y los barrios populares.

En tercer lugar, a pesar de todo, una actitud de expectativa ante las próximas negociaciones de convenios, sobre todo en las grandes empresas, ante las elecciones sindicales y ante “lo que va a pasar”, pues en definitiva la mayoría de trabajadores conservan la esperanza de que será posible, en la lucha, defender sus reivindicaciones.

Este estado de ánimo contradictorio se ha reflejado en las centrales sindicales y en las movilizaciones obreras y populares de estas últimas semanas. Las direcciones centrales de CCOO y UGT se han topado, en particular esta última, con más dificultades de las previstas para imponer la disciplina en sus filas. Hemos seleccionado algunos textos y declaraciones entre los cientos que existen (véanse los anexos). Sin duda, nos encontramos ante la expresión de importantes corrientes de oposición en el seno de los grandes sindicatos: está claro que existe una gama muy amplia de críticas al pacto.

Las hay que se expresan clara y firmemente como la de la UGT de Álava, la UGT y CCOO de la zona minera de Nerva, CCOO de Mondragón, CCOO de la industria química de La Coruña, CCOO de la construcción de Badalona, entre otras; algunas mantienen cierta ambigüedad ante el pacto, como CCOO de Navarra, la coordinadora de empresas en crisis de Barcelona, la coordinadora de FEMSA, etc.; o combinan la crítica al pacto con posturas ultrasectarias frente a las demás centrales sindicales, como UGT de Madrid, que sufre una verdadera “CCOOfobia”. Sería absurdo esperar que estas “corrientes de izquierda” aparezcan dotadas de una perfecta coherencia; es cierto que no la tienen, pero esto no impide en absoluto librar una dura batalla contra las direcciones sindicales reformistas con el apoyo masivo de sectores de la base sindical. UGT y CCOO ya tienen cada una más de un millón de afiliados.

Asimismo se observa, por otro lado, cierto desplazamiento “a la izquierda” de los sindicatos minoritarios, particularmente el Sindicato Unitario (SU, que tiene unos 80.000 afiliados y está controlado por la Organización Revolucionaria de Trabajadores, maoísta), que ha propuesto un “frente reivindicativo común” contra el pacto de la Moncloa. La Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT, que cuenta con unos 100.000 afiliados y está controlado por el Partido del Trabajo de

España, maoísta) parte de una postura crítica con respecto únicamente al carácter limitado de las “contrapartidas” de la oferta gubernamental, en vez de una posición más ofensiva de rechazo del pacto. La fracción de USO contraria a la fusión con UGT y que cuenta con unos 100.000 adherentes, también se ha posicionado claramente en contra del pacto. Finalmente, la CNT se ha pronunciado en el mismo sentido, pero esta central (que reúne a unos 60.000 afiliados) es cada vez más marginal y su postura actual de “boicot a las elecciones sindicales” probablemente la margine todavía más.

Por consiguiente, el problema no es que falten fuerzas para librar la batalla contra el pacto de la Moncloa; el problema es que las fuerzas están dispersas, desorientadas, carentes de la voluntad unitaria necesaria y de la claridad indispensable sobre los objetivos que permitirían a esas fuerzas aparecer a los ojos de los trabajadores como una alternativa creíble frente a la capitulación ante el pacto. Construir esta alternativa, esta es la gran tarea del momento: en el terreno sindical, porque es ahí donde la sensibilidad de los trabajadores y su rechazo del pacto de la Moncloa son más evidentes. A lo largo de las últimas semanas han tenido lugar decenas de manifestaciones, y las consignas que más se escucharon en ellas fueron: “Unidad sindical contra el pacto social”, “Abajo el pacto de la Moncloa”. Y no se trataba de manifestaciones menores: 800.000 personas en Madrid, 200.000 en Barcelona, 150.000 en Bilbao, 100.000 en Sevilla, 80.000 en San Sebastián, 30.000 en Vitoria, 15.000 en Valladolid, 10.000 en Albacete, etc. Al mismo tiempo se producen esas clásicas “explosiones” obreras que tan larga tradición tienen en el Estado español, como la que ha sacudido a Cádiz en solidaridad con los trabajadores de los astilleros, con una manifestación de más de 100.000 personas, enfrentamientos violentos con la policía, la negativa a reanudar el trabajo antes de que fueran puestos en libertad los trabajadores detenidos y constara la garantía de su puesto de trabajo, con la afirmación de su voluntad de volver a la lucha ante la menor amenaza de despido. Las primeras grandes negociaciones comienzan en diciembre, coincidiendo en el tiempo con las elecciones sindicales. El otoño, es cierto, no ha sido muy caliente, pero queda el invierno.

9 de noviembre de 1977

Les travailleurs se mobilisent contre le pacte de la Moncloa

Le pacte social (1) est vite arrivé le pacte politique : ses aspects peu nouveaux : modifications mineures de la loi en vigueur sur la liberté d'expression et les droits d'association et de manifestation ; révisions de quelques articles du Code pénal (sans toucher à ceux qui concernent le divorce) ; mesures de centralisation de l'appareil répressif qui comprennent la création d'une brigade "antiterroriste" appelée "Unité de police judiciaire", etc. L'Alliance populaire (AP), le parti d'extrême-droite de Fraga Iribarne, n'a pas signé le pacte, sous prétexte "qu'il ne renforçait pas suffisamment l'autorité de l'Etat" ; les dirigeants de l'AP se sont enorgueillis d'avoir échappé, par leur présence aux négociations, la démilitarisation de la "Guardia civil". En effet, ce corps de répression traditionnellement célèbre continue à être intégré aux Forces armées.

Appliquer le pacte

Les travailleurs ont pu rapidement faire l'expérience de conséquences du pacte. Plusieurs contrats salariaux signés avant les accords de la Moncloa ont été considérés par les patrons comme "caducs" car les augmentations qui y étaient prévues dépassaient celles établies comme limites par le pacte. Les salaires soumis au contrôle des prix sont passés de 147 à 86 ; les patrons ont annoncé des augmentations de prix imminentes pour les transports publics, l'huile d'olive, le tabac, etc., de l'ordre de 30%. Mais, fait significatif, le lendemain de la signature du pacte politique, on apprit l'existence d'une "directive à circulation limitée" émanant du ministre de l'Intérieur et adressée aux gouverneurs civils. Celle-ci constitue une véritable déclaration de guerre contre ceux que le ministre range dans la catégorie de la "subversion", c'est-à-dire "les actes illicites des associations politiques légales", "les manifestations devant les édifices publics", "les piquets de grève", "les informations de presse qui s'en prennent aux forces de l'ordre public", "les destitutions de municipalités" par la population et en fin de compte "tout ce qui met en cause l'unité de l'Espagne, la personne du Roi et sa famille ou les forces armées et de l'ordre public". Un inoubliable relent franquiste se dégage de ce document.

Les partis ouvriers majoritaires allaient élever la voix contre une pareille menace ou, au moins, nuancer leur soutien au pacte de la Moncloa, pensaient certains. Ils furent vite démentis. Quelques jours plus tard, Carrillo devait déclarer

à la télévision, entre autres choses : "Je suis convaincu que les travailleurs soutiendront la mise en pratique des pactes, parce que la classe ouvrière est beaucoup plus responsable que beaucoup ne le croient". Felipe Gonzalez, pour sa part, dira : "D'importants progrès ont été réalisés dans la compréhension des libertés fondamentales (...). Nous autres, socialistes, nous allons passer à une opposition très constructive et nous serons très exigeants pour que le gouvernement applique le pacte."

"Appliquer le pacte", tel est le grand argument, "le grand objectif" sur lequel tombent d'accord les directions socialiste et eurocommuniste, quelles que soient leurs divergences connues que l'on pourrait résumer ainsi : face au pacte les Commissions ouvrières répondent "oui mais", l'UGT "non mais". Carrillo (PCE) et Gonzalez (PSOE), Redondo (UGT) et Camacho (CO) insistent à chaque fois sur la nécessité pour les travailleurs de faire tout pour obtenir que le "gouvernement applique le pacte de la Moncloa". Ils n'ont d'autre mot d'ordre, d'autre but que celui-là.

Les premières réactions

Quelle a été la réaction des travailleurs ? En général, les premières réactions combinent trois éléments contradictoires. En premier lieu, le refus du pacte social : les tentatives des directions réformistes d'embellir les aspects économiques du "compromis historique" ont eu très peu de succès ; la classe ouvrière comprend fort bien qu'on veut lui faire payer intégralement le coût de la crise et elle n'a aucune confiance dans les promesses de "prospérité future".

En second lieu, une importante désorientation politique accompagnée de doutes sur la possibilité pratique de faire échec au plan : le comportement des directions réformistes (qui, par ailleurs, mettent beaucoup d'énergie à échanger des insultes), les difficultés à mettre sur pied une riposte unitaire et, particulièrement, l'audience que trouvent parmi les travailleurs l'argument de "la menace de coup d'Etat", créent ce malaise perceptible dans les usines et dans les quartiers populaires.

En troisième lieu, malgré tout, une attitude d'expectative à l'approche des prochaines négociations contractuelles, surtout dans les grandes entreprises, des élections syndicales, et face

à "ce qui va se passer", car, en définitive, la majorité des travailleurs conserve l'espoir qu'il sera possible, dans la lutte, de défendre leurs revendications.

Cet état d'esprit contradictoire s'est réfléchi dans les centrales syndicales et dans les mobilisations du mouvement ouvrier et populaire, au cours de ces dernières semaines. Les directions centrales des CO et de l'UGT ont rencontré, particulièrement pour cette dernière, plus de difficultés que prévues à imposer la discipline dans leurs rangs. Nous avons choisi quelques textes et prises de position parmi les centaines qui existent (voir annexes). Sans aucun doute possible, nous nous trouvons face à l'expression d'importants courants d'opposition au sein des syndicats de masse : il existe certainement une gamme très large de critiques contre le pacte.

Celles qui s'expriment clairement et fermement comme l'UGT d'Alava, l'UGT et les CO de la zone minière de Nerva, les CO de Mondragon, les CO des usines chimiques de La Corogne, les CO de la construction de Badalona, entre autres ; certaines conservent une certaine ambiguïté vis-à-vis du pacte, les CO de Navarre, la coordination des entreprises en crise de Barcelone, la coordination de FEMSA, etc. ou accompagnent la critique du pacte de positions ultra-sectaires envers les autres centrales syndicales comme l'UGT de Madrid qui souffre d'une véritable "CO-phobie". Il serait absurde de s'attendre à ce que ces "courants de gauche" apparaissent dotés d'une parfaite cohérence ; il est vrai qu'ils ne la possèdent pas mais cela n'empêche en rien de livrer une dure bataille contre les directions syndicales réformistes avec un appui de masse dans des secteurs de la base syndicale. L'UGT et les CO ont déjà largement dépassé, chacune, le million d'adhérents.

On note également par ailleurs un certain déplacement "à gauche" des syndicats minoritaires, particulièrement du Syndicat unitaire (SU : quelque 80 000 adhérents, contrôlé par l'ORT - Organisation révolutionnaire des travailleurs, maoïste) qui a proposé un "Front revendicatif commun" contre le pacte de la Moncloa. La Confédération des syndicats unitaires de travailleurs (CSUT : environ 100 000 affiliés, contrôlé

par le PTE - Parti du travail d'Espagne, maoïste) est d'une position de critique exclusive du caractère limité des "contreparties" qui figuraient dans l'offre gouvernementale à une position plus offensive de rejet du pacte. L'USO-CO (c'est-à-dire la partie de cette centrale opposée à la fusion avec l'UGT et qui rassemble près de 100 000 adhérents) est aussi clairement pris position contre le pacte. Finalement, la CNT s'est prononcée dans le même sens, mais cette centrale (qui réunit à peu près 60 000 adhérents) est de plus en plus marginale et sa position actuelle de "boycottage des élections syndicales" va probablement la marginaliser davantage.

Par conséquent, le problème n'est donc pas qu'il manque des forces pour livrer bataille contre le pacte de la Moncloa, le problème est que les forces sont dispersées, sans orientation sans la volonté unitaire nécessaire, sans la clarté indispensable sur les objectifs qui permettraient à ces forces d'apparaître aux yeux des travailleurs comme une alternative crédible face à la capitulation devant le pacte. Construire cette alternative, telle est la grande tâche de l'heure : sur le terrain syndical, car c'est là que la sensibilité des travailleurs et leur refus du pacte de la Moncloa sont les plus forts et les plus évidents. Durant les dernières semaines, des dizaines de manifestations se sont déroulées. Les slogans qu'on y entendait le plus souvent étaient : "Unité syndicale contre le pacte social", "à bas le pacte de la Moncloa". Et ce n'étaient pas des manifestations réduites : 800 000 à Madrid, 200 000 à Barcelone, 150 000 à Bilbao, 100 000 à Séville, 80 000 à San Sebastian, 30 000 à Vitoria, 15 000 à Valladolid, 10 000 à Albacete, etc. En même temps se produisent ces classiques "explosions" ouvrières - de si longue tradition dans l'Etat espagnol - comme celle qui a secoué Cadix en solidarité avec les travailleurs des chantiers navals, et son cortège de manifestations de plus de 100 000 personnes, d'affrontements violents avec la police, de refus de reprendre le travail après la libération des travailleurs arrêtés et la garantie de leur emploi, d'affirmation de leur volonté de reprendre la lutte face à la moindre menace de licenciement. Les premières grandes négociations commencent en décembre, en même temps que les élections syndicales. L'automne certes, n'a pas été très chaud, mais il reste l'hiver.

9 novembre 1977